

—S. Guzman.—Luis Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Ignacio M. Altamirano.—Luis M. Aguilar, secretario.

Es copia que certifico: México, Marzo 28 de 1873. Lic. Enrique Landa, oficial mayor.

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Chihuahua, por D. Santos Bermudez, contra el Cefe político del Canton Bravos, por violacion de garantías constitucionales.

Promotoria fiscal del Juzgado de Distrito del Estado de Chihuahua.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El Promotor fiscal, dice: que el 21 de Agosto último, el C. Cefe político del Canton Bravos, mandó aprehender á D. Santos Bermudez, vecino de Paso del Norte y lo condenó el 23 del mismo á sufrir un mes de reclusion en la cárcel pública, como consta de la orden de prision dirigida al alcaide de la cárcel, y cuya copia obra á fojas 26 de los autos.

Los motivos de la prision de Bermudez, segun ese documento, son: haberse negado á prestar los auxilios que se le pidieron por el Gobierno del Estado: haberse pasado al extranjero y haber faltado al respeto á la Jefatura política.

Algunos dias despues, el vice-cónsul de los Estados-Unidos de América en el Paso del Norte, W. H. Pierson, se dirigió al Juzgado de Distrito, por medio de la comunicacion fecha 26 del mismo mes, en que manifiesta que Bermudez es ciudadano americano, y habiendo sido aprehendido, por haberse rehusado á pagar un segundo préstamo que se le exigía para la guerra contra los revolucionarios, debía ser puesto en libertad,

por no estar obligado á prestar esa clase de servicios: que la cuestion á que esto daba lugar es de un carácter internacional que habia de ser decidida por las autoridades federales: que si Bermudez, al presentar su negativa habia cometido alguna falta, estaba ya suficientemente castigada con siete dias de prision; y que este tenia derecho á ser oido por el Juzgado de Distrito, como respetuosamente lo solicitaba. Traducido el original inglés de esta comunicacion, por los intérpretes nombrados al efecto, el Juzgado, de conformidad con lo prevenido en el reglamento consular vijente y sin admitir la representacion del vice-cónsul por no tener facultad de representar á sus nacionales, suponiendo que Bermudez lo fuese, se limitó á citar á este para que promoviera en forma; manifestándole que se le administraría justicia en todo cuanto la tuviera, en cuya virtud, el repetido Bermudez instauró el correspondiente juicio de amparo por violacion de garantías, que se ha sustanciado con total arreglo á la ley orgánica de 20 de Enero de 1869.

Presentado el escrito de queja, la primera determinacion del Juzgado fué suspender el acto reclamado, porque tratándose de una prision de treinta dias, de los que habian trascurrido ocho, el negocio tenia el carácter de urgente y exigía la pronta suspension de los efectos de la resolucion que el quejoso calificaba de atentatoria á las garantías individuales, pues siendo irreparable la sentencia, quedaria ilusoria sin la escarcelacion inmediata del quejoso.

En seguida se pidió informe á la autoridad responsable, y esta le rindió alegando irregularidad en los procedimientos, confesando los hechos en que Bermudez funda su queja y espresando las razones que tuvo presentes para imponerle los treinta dias de prision que han dado origen al juicio. A solicitud

del que suscribe, se abrió el término probatorio y durante él, tanto el quejoso como el C. Gefe político del Canton Bravos, rindieron las que creyeron oportunas en apoyo de sus derechos respectivos, presentándose por fin los alegatos que corren agregados.

Hecha esta ligerísima reseña de los autos, procurará el que suscribe dilucidar las diversas cuestiones que se han suscitado; haciendo desde luego abstracción de las que versan sobre la nacionalidad del quejoso, y sobre la legitimidad con que el vice-cónsul de los Estados Unidos en el Paso del Norte ejerce sus funciones consulares, que solo tocará incidentalmente, por no creer que el Juzgado deba resolverlas; tanto porque las garantías que sanciona nuestra Carta fundamental en la sec. 1.<sup>a</sup> del tít. 1.<sup>o</sup> son concedidas al hombre sin distinción de nacionalidad y no al ciudadano, como porque no consta que el Juzgado de Distrito haya admitido y considerado legal la representación del vice-cónsul, sino que en virtud de lo dispuesto en la frac. 2.<sup>a</sup> del art. 10 de la ley de 26 de Noviembre de 1859, atendió la recomendación de una persona que, á ciencia y paciencia de las autoridades del Canton Bravos, está al frente del consulado americano, ejerce sus funciones y se dirige oficialmente á dichas autoridades, sin que antes del presente juicio se tuviera noticia que carecía de exequatur, que solo la Jefatura política debe exigir.

Para que proceda en justicia la imposición de una pena, es preciso que antes exista el delito ó la falta á que deba aplicarse, de lo contrario todo maltratamiento ó castigo no puede menos que ser calificado de atentatorio á las garantías individuales sancionadas en los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución federal.

Examinado el informe rendido por la autoridad política del Canton Bravos y la Orden que libró al alcaide de la cárcel

de Paso del Norte, desde luego se ve que no ha existido delito alguno del que se haga responsable á Bermudez, puesto que no se le hace cargo de la infracción voluntaria de una ley penal, ni á que haya hecho lo que ella prohíbe, ni dejado de hacer lo que ella manda, únicos casos de delito conforme al art. 4.<sup>o</sup> del Código. Parece que mas bien se trata de faltas: veamos si los hechos que motivaron su aprehensión deben ser castigados con pena de prisión en la cárcel pública.

El primer cargo que se formula al quejoso, es no haber prestado los auxilios que pidió el Gobierno del Estado para atender á la guerra contra los revolucionarios que ocuparon esta capital en los meses de Julio á Octubre últimos, consistiendo esos auxilios en las armas que el mismo gobierno mandó recoger por medio de un comisionado especial.

Testigo presencial de la manera con que las armas fueron colectadas, puede asegurar el que suscribe, y al Juzgado le consta, que la requisición se hizo pidiéndolas prestadas á los que voluntariamente quisieran contribuir para la defensa de las instituciones; porque se pulsaron los inconvenientes que podía traer consigo la exacción forzosa y confiando en que todos los buenos mexicanos no negarian tan pequeño auxilio á su gobierno. Se hizo así la requisición y con ligerísimas excepciones todos prestaron las armas que se les pidieron, Bermudez fué una de ellas; se negó á dar sus armas, ó el valor equivalente, y por esto se lo condenó á pagar cincuenta pesos de multa ó treinta días de reclusión, que debia sufrir en la cárcel pública: si la requisición fué voluntaria, evidentemente que al rehusarse Bermudez, no cometió un delito ni una falta, porque las cosas que no se prueba estar prohibidas, se reputan siempre lícitas. *Que non probantur prohibita licita et permissa*

*consentur.* Pero aun suponiendo que hubiera sido forzosa, no podría considerarse de otro modo respecto del quejoso, que como una deuda de un carácter puramente civil, en la que la autoridad política tendría su acción espedita para hacerla efectiva ante los Tribunales, ó bien hacer uso de la facultad económico coactiva conforme á la ley de 20 de Enero de 1837 y sus correlativas de 20 de Noviembre de 1838 y 11 de Diciembre de 1871, para requerir de pago al causante y embargarlo si necesario fuese; pero nunca para aprisionarlo en contravención al art. 17 de la Constitución, que manda: que nadie puede ser preso por deudas de un carácter puramente civil.

La conducta de Bermudez, como dice muy bien el C. Gefe político del Canton Bravos, puede calificarse de un mal ciudadano, será egoísta si se quiere; pero de esto á ser delincuente hay una distancia enorme.

La ciudadanía americana en la frontera, es el caballo de batalla para todos los malos mexicanos, este es un hecho, mas por desgracia la autoridad, á veces, cabalga tambien en él, como puede verse en la acta de fojas 32 y 33 de los autos, en que para quitar el voto al quejoso en las elecciones locales, se le consideró como á extranjero.

Las rencillas que llegan á suscitarse en las localidades con motivo del nombramiento popular de los funcionarios públicos, suelen convertirse en odios acerbos é inveterados que la autoridad debe á todo trance extirpar; pero deja de cumplirse con ese deber y frecuentemente se ve con malos ojos al que resiste dar su voto conforme á la consigna.

A la simple lectura de los autos se nota que hay algo de esto en la prision de Bermudez: este, tal vez, ha hecho alguna oposicion y de ahí nace el empeño de perjudicarlo. La communication de fo-

jas 23 presenta una prueba palmaria de esta verdad.

En efecto, la Jefatura política del Canton de Bravos, al comenzar los procedimientos del Juzgado de Distrito, comunicó al Gobierno del Estado que D. Santos Bermudez habia tratado de *rebelarse á mano armada contra las autoridades legítimamente constituidas*, lo que si hubiera sido cierto, bastaba la consignacion del presunto reo á la autoridad federal, que se encontraba entonces en el Paso del Norte, para que levantando la correspondiente averiguacion, hubiera aplicado la pena á que hubiera lugar. Pero no fué así y el Gefe político suplente, C. José M.<sup>a</sup> Uranga, se limitó á dar parte al Gobierno del Estado, quien dispuso se remitiera á Bermudez por cordillera á ciudad Guerrero, no obstante estar pendiente el juicio de amparo. Afortunadamente la prudencia del Gefe político propietario, C. Dr. Mariano Samaniego, hizo que el Tribunal federal no hubiera sido atropellado, obediendo las órdenes del Gobierno.

En las circunstancias en que se pidieron las armas en Paso del Norte, mas que en ningunas otras, debió haberse usado de circunspeccion y olvidando los odios de partido, dar una prueba de respeto á nuestras instituciones: los insurrectos ocupaban esta capital, se tenía noticia de los medios que adoptaban para arbitriarse recursos, adoptar una conducta semejante, recurrir á procedimientos violentos atropellando los sagrados derechos que otorga la suprema ley de toda la Union, era ponerse al nivel de los que sustraídos de la obediencia de los Poderes de la Nacion y lanzados en el terreno revolucionario, no acataban mas ley que la que les demarcaban sus circunstancias.

Parece inútil ocuparse del cargo que se hace á Bermudez por haberse pasado al extranjero, puesto que lejos de constituir un delito, es un derecho sanciona-

do en el art. 11 de la Constitucion, que previene, que todo hombre es libre de entrar y salir de la República sin necesidad de pasaporte ó otro requisito.

En cuanto al tercero y último cargo que se formula al quejoso, por haber cometido faltas de respecto á la autoridad política, al presentar su negativa, aun suponiéndolo cierto, no justifica los treinta dias de prision que se le aplicaron, pues la frac. 2ª del art. 27 de la ley 19, sec. 2ª de la coleccion de leyes del Estado, no da mas facultades á los Jefes políticos para castigar las faltas de respeto que se les cometan, que imponer cincuenta pesos de multa, ó quince dias de reclusion, y el del Canton Bravos aplicó treinta. No cree por demas el que suscribe, copiar la disposicion citada, que á la letra dice: "Conservar en la demarcacion de su mando la tranquilidad pública, imponiendo hasta cien pesos de multa ó hasta un mes de reclusion si el delito no mereciere formacion de causa, á los perturbadores de aquella, dando cuenta á quien corresponda de los hechos y de las providencias que dicten para su conocimiento y resoluciones que convengan.

La mitad de esta pena podrán imponer estos funcionarios á los que desobedezcan ó falten al respeto, arreglándose en todos casos, á las circunstancias de los multados y oyéndolos sumaria y verbalmente en caso que lo pidan, bajo el concepto de que los que se consideren agraviados podrán representar al gobierno, quien sin ulterior recurso, resolverá lo que creyere de justicia. "Se ve, pues, que aun en el caso de las supuestas faltas, la Gefatura política del Canton Bravos, traslimitó sus facultades, aplicando á Bermudez un mes de reclusion en la cárcel.

Hay, ademas, otra consideracion en favor del quejoso. La pena de reclusion, ó de arresto mayor, debe siempre estin-

guirse en un establecimiento distinto de los destinados para la prision (art. 125 del Código penal), así es, que al imponerse á Bermudez dicha pena, debió haberse designado el lugar de su reclusion y nunca confundirlo en la cárcel pública con los demas criminales.

Por todo lo espuesto, y de conformidad con las leyes citadas y muy particularmente en los arts. 101 y 102 de la Constitucion general, el Ministerio público concluye pidiendo con la proposicion siguiente:

Unica: La Justicia de la Union ampara y protege á D. Santos Bermudez contra la providencia dictada en 21 de Agosto último, por el C. Gefe político del Canton Bravos, que lo condenó á sufrir un mes de reclusion en la cárcel pública. Comuníquese á quienes corresponda y compúlsese testimonio de la sentencia, que se publicará en el periódico "Oficial del Estado" y en el "Diario del Supremo Gobierno" y remítanse los autos con las correspondientes copias á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

Chihuahua, Noviembre 30 de 1872.—Firmado.—*Lic. F. N. Ramos.*

Son copias. Chihuahua, Enero 30 de 1873.—*Luis Bárcenas.*—*Abraham Eriberto Perez*, secretario.

#### SENTENCIA del C. juez de Distrito.

Chihuahua, Enero 11 de 1873.—Visto este juicio de amparo, promovido por el Sr. D. Santos Bermudez, vecino de la Villa de Paso del Norte, contra el Gefe político del Canton Bravos (Estado de Chihuahua). Visto el escrito de 23 de Agosto del año próximo pasado, y su version al español. Visto el auto en que se decretó la suspension del acto reclamado, el informe con justificacion ren-

dido por la autoridad inmediata ejecutora de él, lo pedido por el Ministerio público; la prueba rendida por el actor, la citacion para sentencia y todo lo demas que de autos consta y tener presente convino.

Considerando: que este Juzgado al decretar la suspension del acto reclamado, tuvo presente para ello las razones en que fundó el acto respectivo: que dichas razones son legales y fundadas en concepto del que suscribe, pues se obró de acuerdo con lo dispuesto por la ley de 20 de Enero de 1869, en sus arts. 39 y 59 parte final, el último de los cuales dispone: que si *hubiere injerencia notoria*, el juez resolverá sobre dicha suspension, á la mayor brevedad posible y con solo el escrito del actor, y en el caso de Santos Bermudez, se trataba nada menos que de una prision de treinta dias, que no daba lugar á dilaciones, sino que por ella quedarian ilusorios los derechos del quejoso, así como tambien vendria á ser ilusoria la sentencia, sin la escarcelacion del mismo.

Considerando: que este Juzgado, al dar curso al escrito de 28 de Agosto de 1872, no infringió, como sin razón alguna lo asegura el C. Gefe político de Bravos, la ley de 20 de Enero de 1869, pues como muy bien dice el C. Promotor fiscal, en su pedimento de 30 de Noviembre, algunos dias despues de la prision de Santos Bermudez, el vice-cónsul de los Estados-Unidos de América en el Paso del Norte, W. H. Pierson, se dirigió á este Juzgado, por medio de la comunicacion, fecha 26 del mismo mes, manifestando: que Bermudez es ciudadano americano, y habiendo sido aprehendido por haberse rehusado á pagar un segundo préstamo que se le exijia, para la guerra contra los revolucionarios, debia ser puesto en libertad, por no estar obligado á prestar esa clase de servicios: que la cuestion á que esto daba lugar,

era de un carácter internacional, que habia de ser decidida por las autoridades federales: que, Bermudez, si habia cometido alguna falta, estaba ya suficientemente castigada con siete dias de prision y que este tenia derecho á ser oido por el Juzgado de Distrito, como respetuosamente lo solicitaba. Traducido el original inglés de esta comunicacion por los intérpretes nombrados al efecto, el Juzgado, de conformidad con lo prevenido en el reglamento consular vijente, y sin admitir la representacion del vice-cónsul, por no tener facultades de representar á sus nacionales, suponiendo que Bermudez lo fuese, se limitó á citar á este, para que promoviera en forma, manifestando que se le administraria justicia en todo cuanto la tuviera. En este estado de cosas, Santos Bermudez instó el correspondiente juicio de amparo por violacion de garantías, cuyo juicio se ha sustanciado con total arreglo á la ley orgánica de 20 de Enero de 1869.

Considerando: que mandado abrir á prueba el negocio, el actor presentó en debida forma la copia de la boleta que se registra á fojas 36 frente, por la que consta que el C. Gefe político de Bravos sentenció á Santos Bermudez á un mes de reclusion en la cárcel, contado desde el dia 21 de Agosto del año próximo pasado: que en el oficio de fecha 29 de Agosto de 1872, dirigido por el C. Gefe político de Bravos á este Juzgado, se lee lo siguiente: "he querido en prueba de mi atento respeto á la autoridad federal, que el auto de escarcelacion que se me comunica con fecha de hoy, sea ejecutado en el momento, y en consecuencia queda escarcelado D. Santos Bermudez." Es un hecho, pues, la orden de prision dada por el C. Gefe político de Bravos, contra Santos Bermudez, quien sufrió aquella durante algunos dias.

Considerando: que el C. Gefe políti-



co de Bravos, en su informe de fojas 18 vuelta, dando la razon de sus procedimientos contra Bermudez, dice: que procedió contra este, por haberse negado á la requisición de armas y porque la Gefatura de Bravos, la hizo en uso de las facultades estraordinarias que el Gobierno le concedió en guerra y hacienda: que las facultades estraordinarias que tan solo se conceden al Ejecutivo, en circunstancias muy escepcionales, malamente pudieran denegarse á una Gefatura, y esta mucho menos pudo legalmente hacer uso de ellas, y esto violando las garantías otorgadas por nuestra Carta fundamental á los ciudadanos en sus personas: que si la Gefatura tenia tales facultades debió haberlo hecho así presente á Bermudez, y así tal vez, habria desaparecido su resistencia. Ademias, el C. Promotor fiscal dice haber sido testigo presencial de la manera con que las armas fueron colectadas, y aquel funcionario asegura, que la requisición se hizo pidiéndolas prestadas á los que voluntariamente quisieran contribuir para la defensa de las instituciones y aquello porque se pulsaron los inconvenientes que podria traer consigo la esacción forzosa, y confiando en que todos los buenos mexicanos no negarian tan pequeño auxilio á su Gobierno. Así es que, el Gefe político de Bravos, no habiendo procedido en virtud de facultades, si realmente las tuvo, como dice en su informe, ó si obró conforme á ellas, no las hizo presentes al quejoso, quien en este caso, hubiera quizá cambiado de conducta, y por otra, no habiendo sido la requisición de armas forzosa, sino voluntaria, como ha asegurado el C. Promotor fiscal, el C. Gefe político de Bravos no tuvo razon legal y fundada para dictar contra Bermudez una órden de prision.

Considerando: que el Gefe político, hace cargo al tantas veces mencionado Bermudez, de haberse negado á prestar

Tomo III.—Parte II.

auxilios al Gobierno, fundando su cargo en la negativa de aquel á la requisición de armas que se le hizo: que aquel cargo fué otro de los motivos que tuvo la Gefatura de Bravos, para ordenar la prision de Bermudez, pero aun suponiendo cierto aquel cargo, el C. Gefe político debió haber obrado de distinto modo, sujetándose para ello á la ley respectiva, porque si por la conducta de Bermudez sospechó que este de alguna manera cooperaba á la revolucion, ó pretendia rebelarse á mano armada contra las autoridades legítimamente constituidas, los procedimientos de dicha Gefatura debieron haberse limitado á decretar la detención de aquel, dando cuenta inmediatamente al Gobierno del Estado para que el dictase las providencias necesarias; mas nunca debió haber decretado contra el que sospechaba culpable una prision de treinta dias, porque semejante decreto importa realmente una pena, y para la imposición de esta, es preciso que antes exista el delito ó falta á que deba aplicarse, y que esta ó aquel estén plenamente probados, lo que no puede decirse en el caso de Bermudez, pues este iba á ser juzgado, como fácilmente se deduce de la nota oficial del ciudadano secretario del Gobierno de 8 de Octubre del año próximo pasado, en la que por acuerdo del C. Gobernador del Estado dice al Gefe político de Bravos remita por cordillera, y con las seguridades necesarias, á D. Santos Bermudes á esta ciudad (Guerrero), supuesto que ha tratado de rebelarse á mano armada contra las autoridades legítimamente constituidas.

Por tanto, aun suponiendo cierto el delito de Bermudez, la Gefatura de Bravos jamas debió haber procedido como lo hizo, porque semejante procedimiento no puede menos que ser atentatorio á las garantías individuales, otorgadas por los arts. 16, 17 y 18 de la Constitucion Federal.

Considerando: que otro de los motivos que tuvo el Gefe político para proceder contra Bermudez, fué haber cometido estas faltas de respecto á la autoridad política, al negarse á la requisición de armas que se le hacía; que aun suponiendo ciertas aquellas faltas, ellas no justifican la pena de treinta días de prisión impuesta, porque la frac. 2ª del art. 27 de la ley 19 de la colección de leyes del Estado, no da facultades á los Gefes políticos para castigar las faltas de respeto que se les cometen con la pena que se impuso á Bermudez, pues aquella ley, en la parte citada, hablando de las facultades y obligaciones de los Gefes políticos de Canton, dice: "2ª Conservar, en la demarcación de su mando, la tranquilidad pública, imponiendo hasta 100 pesos de multa, ó un mes de reclusión, si el delito no mereciere formación de causa, á los perturbadores de aquella, dando cuenta á quien corresponde de los hechos y de las providencias que dicten, para su conocimiento y resoluciones que convengan."

"La mitad de esta pena podrán imponer estos funcionarios, á los que desobedezcan ó falten al respeto, arreglándose en todos casos, á las circunstancias de los multados, y oyéndolos sumaria y verbalmente en caso que lo pidan, bajo el concepto de que los que se consideren agraviados podrán representar al gobierno, quien sin ulterior recurso resolverá lo que considere de Justicia." Considerando: que á Santos Bermudez no se le oyó como lo previene la ley, sino que él supo que había sido juzgado y sentenciado cuando le fué presentada para su cumplimiento la orden de prisión.

Considerando: que aun en el supuesto de que Santos Bermudez hubiera sido juzgado y sentenciado por faltas de respecto á la autoridad conforme en todo á la ley respectiva, la pena de reclusión que, en aquel caso le fuese impuesta,

debió haberla estinguido en un establecimiento distinto de los destinados para la prisión (art. 125 del Código penal) de los criminales, con quienes en ningún supuesto pudo confundirse Bermudez.

Considerando: que las pruebas rendidas por el C. Gefe político de Bravos, se reducen á la declaración de los CC. José E. Armendariz y Mariano Samaniego, los que, á fojas 29 vuelta y 30 frente, en lo conducente al cargo de que me ocupo, declaran: profirió Bermudez algunas palabras amenazantes para todos los que él creía que lo perseguían; y Samaniego á fojas 30 frente dice: que Bermudez habló en un tono ácre y ofensivo al carácter del Gefe político, profiriendo amenazas contra él y todos aquellos que creía sus enemigos: que no especificando dichos testigos las palabras testuales de que se sirvió, no tienen toda la fuerza que debieran en atención á las demás circunstancias que caracterizan á aquellas: que suponiendo que se expresasen aquellas y estas fuesen tales que constituyesen grave injuria, siempre en este caso, si aquellas hubieren sido tales que por ellas hubiese habido razón bastante para proceder á formación de causa, nunca debió el Gefe político de Bravos haber obrado en contra de lo prevenido por la ley 19, frac. 2ª de la colección de leyes del Estado.

Considerando: que el haberse pasado al extranjero Santos Bermudez, no puede constituir un delito, puesto que el art. 11 de nuestra Constitución Federal previene, que "todo hombre tiene derecho para entrar y salir de la República, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvo conducto ó otro requisito semejante." El ejercicio de este derecho no perjudica las legítimas facultades de la autoridad judicial ó administrativa en los casos de responsabilidad criminal, ó civil: que Bermudez no se encueta

en la parte final del anterior artículo: que aun en este supuesto, el C. Gefe político de Bravos, debió haberse limitado á detener á Bermudez, dando parte á la autoridad respectiva; pero nunca debió haberle impuesto una pena como la que decretó.

Considerando: que las garantías que sanciona nuestra Carta fundamental, en la sec. 1.<sup>a</sup> tít. 1.<sup>o</sup>, se conceden al hombre sin distincion de nacionalidad. Por tales razones y consideraciones, y de conformidad con el pedimento del C. Promotor fiscal, la autoridad federal, en nombre de los Supremos Poderes de la Union, decreta:

1.<sup>o</sup> La Justicia de la Union ampara y protege á D. Santos Bermudez contra la providencia dictada en 21 de Agosto de 1872, por el C. Gefe político del Canton Bravos, que lo condenó á sufrir un mes de reclusion en la cárcel pública.

2.<sup>o</sup> Hágase saber este fallo, y sáquense copias para las publicaciones de estilo, elevándose á la Suprema Corte de Justicia el expediente original, para su revision. Así lo mandó y firmó el ciudadano juez interino, por ante mí. Doy fé.  
—Luis Bárcenas.—Abraham Eriberto Perez, secretario.

#### EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo 18 de 1873.—Visto el recurso de amparo que en 28 de Agosto de 1872, promovió en la Villa de Paso del Norte, ante el juez de Distrito del Estado de Chihuahua, D. Santos Bermudez, vecino de esa Villa, contra la resolución del Gefe político del Distrito de Bravos, que impuso al promovente un mes de reclusion en la cárcel, porque segun dice, no pudo ó no debió dar auxilio de armas ó de un caballo que se le pidió, contra los revolucionarios, cuya

resolucion alega el mismo promovente que viola en su persona las garantías que otorgan los arts. 19 y 21 de la Constitucion de la República mexicana. Visto el informe de la autoridad, contra cuyo acto se ha pedido el amparo y las demas constancias de autos.

Considerando: que segun estas, el motivo de la reclusion del Gefe político del Distrito de Bravos, contra D. Santos Bermudez, lo constituyen en último análisis, faltas al respeto debido á esa autoridad: que estas faltas conforme al art. 21 de la Constitucion federal, se castigan con la reclusion en los casos y modo que espresamente determina la ley: que la frac. 2.<sup>a</sup> del art. 27 de la ley 19 de la coleccion de leyes del Estado, espresamente dispone que la pena para las faltas mencionadas en las circunstancias del caso, sea de quince dias de reclusion mediando un procedimiento que determina, y que en virtud de lo acabado de espouer, el mes de reclusion impuesto por el C. Gefe político de Bravos á Bermudez, como esceso del término legal y sin la forma debida, es con violacion de la garantía otorgada por dicho art. 21 constitucional. Con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve: se confirma la sentencia que en 11 de Enero próximo pasado pronunció en Chihuahua el juez de Distrito del Estado, en la cual declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á D. Santos Bermudez, contra la providencia dictada en 21 de Agosto de 1872 por el C. Gefe político del Canton de Bravos, que le condenó á sufrir un mes de reclusion en la cárcel pública.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de Distrito que las elevó en revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos; y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magis-



trados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Marzo 31 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz, por Casimiro Ramirez, contra providencias del C. Cefe político de Tlaxiaco, que le violan garantías individuales.

#### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El Promotor fiscal, dice: que el C. Casimiro Ramirez, vecino de Chacaltongo, Distrito de Tlaxiaco, en el Estado de Oaxaca, solicita proteccion y amparo de la Justicia Federal, contra una disposicion del C. Cefe político de dicho Distrito, que lo consignó al servicio de las armas en pena de su delito de perturbador del órden público, habiendo sido remitido por conducto del Cuartel general de la 2ª division, á esta Plaza, destinándolo el C. Comandante militar al tercer batallon de infantería en que fué filiado, con violacion de los artículos 20 y 21 de la Constitucion Federal, que concede al hombre las garantías de ser juzgado por la autoridad judicial competente, mediante el proceso que se forme con todos los requisitos legales.

Estos hechos están confesados y debidamente comprobados con el detallado informe que ha emitido la autoridad ejecutora del acto reclamado, y por tal razon, y la no menos atendible de no

haber sido aplicada al quejoso la ley de amnistía espedida por el Supremo Gobierno, que indudablemente le comprende, pide al Juzgado que se sirva acceder á la solicitud del reclamante, por ser de justicia.

H. Veracruz, Febrero 22 de 1873.—*Lic. J. M. López de Escalera.*

#### SENTENCIA del ciudadano juez de Distrito.

“Heróica Veracruz, Marzo 7 de 1873.—Visto este juicio de amparo y proteccion, promovido por Casimiro Ramirez, vecino de Chacaltongo, Distrito de Tlaxiaco, en el Estado de Oaxaca, y continuado por su defensor el C. Lic. Pedro G. Catalá, contra una providencia que dictó el C. Cefe político de aquel Distrito, que lo destinó al servicio de las armas, y ejecutó el C. Comandante militar de esta Plaza, por habérselo remitido el Cuartel general de la 2ª division, con violacion, segun espresa, de las garantías que otorga al hombre la Constitucion Federal en sus artículos 20 y 21; el informe producido por la autoridad ejecutora del acto reclamado, en que aparece que efectivamente fué filiado el quejoso en el batallon 3º de infantería; y que la consignacion se hizo sin que procediera el respectivo juicio y condenacion del delito que se le atribuyó de haber perturbado la paz pública en el Estado de Oaxaca, seguido por autoridad judicial competente; y teniéndose en consideracion: que ademas de estas circunstancias favorables al reclamante, existe la no menos atendible de no habersele aplicado la ley general espedida por el Supremo gobierno que concedió amnistía á los reos políticos, ordenando que sean puestos en libertad: que por lo tanto, han sido violadas las garantías designadas en el ocurno, y todo lo demas que tiene alegado el C-